Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha veinte de marzo de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del Recurso de Revisión **07343/INFOEM/IP/RR/2024**, promovido por **XXXX,** a quien en lo sucesivo se le identificará como **RECURRENTE**, en contra de la respuesta de la **Unidad de Asuntos Internos**, en adelante el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente Resolución, con base en los siguientes:

**A N T E C E D E N T E S**

1. El nueve de octubre de dos mil veinticuatro, **EL RECURRENTE** presentó, ante el **SUJETO OBLIGADO** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la Solicitud de Información Pública registrada con el número **00524/UAI/IP/2024,** en la que se solicitó lo siguiente:

*“versión pública de la asamblea en donde se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04; asimismo, proporcione el nombre de los servidores públicos que participaron en dicha asamblea remitiendo Nombre, Cargo, Documento que los acredite como Servidores Públicos Habilitados, Constancia de registro del comité de transparencia ante el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; indique el motivo y fundamento legal por medio del cual se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04.”*

1. Señaló como modalidad de entrega de la información a través del **SAIMEX**.
2. En fecha veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro, mediante Acuerdo UAI/CT/EXTRAORDINARIA/2024/06/04 se aprobó por unanimidad de votos la ampliación del plazo para atender la solicitud de información, de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
3. En fecha once de noviembre de dos mil veinticuatro, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a través de cuatro archivos electrónicos, a saber:

* **ACTA CUARTA SESIÓN ORDINARIA.pdf,** que corresponde al Acta del Comité de Transparencia UAI-CT-ORD-04-2024, en la que se aprueba la versión publica de información a entregar a diversas solicitudes de información.
* **Integrantes.pdf,** documento en el que constan nombres de integrantes del Comité de Transparencia registrados ante este Instituto.
* **Of. de Desig..pdf,** que contiene tres oficios de designación como servidores públicos habilitados de tres servidores públicos.
* **F-524.pdf,** que contiene un oficio signado por el Titular de la Unidad de Transparencia en el que informa al solicitante de la respuesta emitida.

1. Inconforme, **EL RECURRENTE** interpuso el recurso de revisión, en contra de la declinación de incompetencia, señalando:

* **ACTO IMPUGNADO**

*“INCOMPLETA”*

* **RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“INCOMPLETA”*

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente al rubro indicado; asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turna a la Comisionada María del Rosario Mejía Ayala, para su análisis.
2. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de **veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestara lo que a derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentará el informe justificado procedente.
3. El **SUJETO OBLIGADO,** el día diez de diciembre de dos mil veinticuatro rindió informe justificado a través de un archivo electrónico denominado ***RR 7343 anexos de Inf. Justificado.pdf y INF.JUST. 7343.pdf***, a los cuales, el primero de ellos contiene una actualización de los integrantes del Comité de Transparencia, registrados ante este Instituto y un oficio de designación como Responsable del Área Coordinadora de Archivos de la Unidad de Transparencia, de una servidora pública; el segundo de los archivos que corresponde al informe justificado rendido por la Subdirectora de Información, Programación y Seguimiento, mediante el cual solicita se confirme la respuesta emitida.
4. Por su parte, el particular fue omiso en realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera.
5. El **once de marzo del año en curso**, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se notificó que el plazo de treinta días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de quince días hábiles adicionales.
6. Este organismo garante no pasa por alto explicar que la dilación en la resolución del presente asunto encuentra su justificación en que, el alto número de recursos de revisión recibidos ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este instituto, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la elaboración de resoluciones a dichos medios de impugnación.
7. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
8. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
9. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
10. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:
    * 1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
      2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
      3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
      4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.
11. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o *cuasi jurisdiccional* respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
12. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro **“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”,** visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
13. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
14. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO**.” consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

1. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional. Seguidamente mediante Acuerdo de fecha **diecisiete de marzo del año en curso** se decretó el cierre de instrucción, por lo que: ---------------------------------------------------------

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el **RECURRENTE** conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 6, 9 fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. Este Órgano Garante considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; asimismo no se tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia.
2. Por otro lado, es de suma importancia señalar que la parte recurrente no proporciona un nombre o datos de identificación como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre completo no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

1. Finalmente, el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la citada Ley de la materia, por lo que es procedente que este Instituto conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Planteamiento de la *Litis***

1. El recurrente solicitó la siguiente información:

* Versión pública de la asamblea en donde se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04;
* Nombre de los servidores públicos que participaron en dicha asamblea, cargo, documento que los acredite como servidores públicos habilitados;
* Constancia de registro del Comité de Transparencia ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y
* El motivo y fundamento legal por medio del cual se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04.

1. El **SUJETO OBLIGADO** remitió diverso soporte documental relacionado con lo solicitado con lo solicitado ya descrito en el anterior Párrafo 2; no obstante el particular interpuso el Recurso de Revisión, inconformándose por la entrega de información incompleta.
2. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en el presente Recurso de Revisión se circunscribe a determinar si se actualizan la causal de procedencia prevista en el artículo 179, fracción **V** de la **Ley de Transparencia y Acceso a la** Información **Pública del Estado de México y Municipios**; fracción que determina la hipótesis jurídica relativa a la entrega de información incompleta por el sujeto obligado; contexto del cual se dolió el **RECURRENTE** al momento de interponer su recurso de revisión; asimismo, determinar si se vulnera el derecho de acceso a la información de la particular por la inobservancia a los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señala entre otros, que en la generación y entrega de información se deberá garantizar que sea oportuna, expedita, completa e integral.

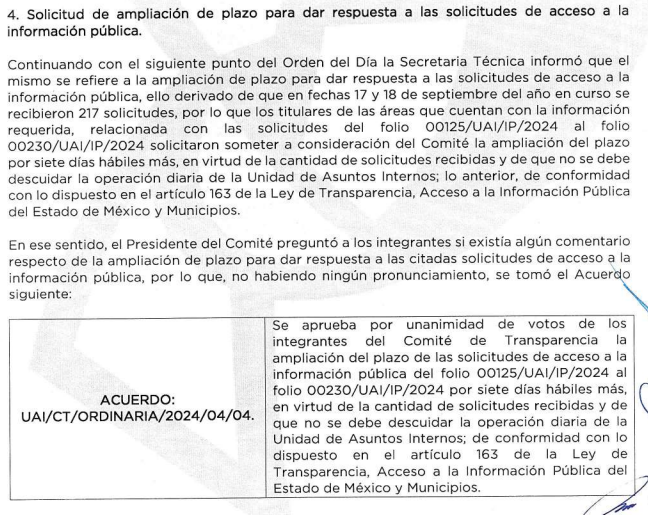
**CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

1. Determinado lo anterior; revisaremos la atención otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud que dio origen a este recurso, considerando imprescindible establecer lo que la regulación determina, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata nuestra Ley de Transparencia local, en su artículo 12, el cual establece que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma, del mismo modo, el artículo 18 establece que los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.
2. Asimismo, es relevante mencionar que el artículo 19 del ordenamiento local de la materia señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.
3. Los artículos antes citados, refieren que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que abarca el solicitar, investigar, difundir y buscar información que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, ya sea porque estos las generaron o la poseen en atención a sus funciones, por lo que se le considera un bien común de dominio público, toda vez que al tratarse de acciones ejercidas por un servidor público, este lo hace en representación del Estado, por lo que le pertenece a todos y debe ser accesible a cualquier persona, ya sea que los particulares la puedan consultar por encontrarse publicada en cualquier medio de difusión o porque la requieren a través de una solicitud de acceso a la información, siempre y cuando no encuadre en una de las excepciones contempladas por la ley.

**29.** Acotado lo anterior, es dable primeramente recordar que la respuesta versó en remitir cuatro archivos con la intención de colmar los requerimientos que integraron la solicitud de información, de modo tal que se estima dable realizar el siguiente cuadro comparativo a efecto de cotejar detenidamente la información proporcionada para identificar qué elementos faltan o son insuficientes y, de ser el caso determinar si ciertamente se encuentra incompleta la información entregada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOLICITUD** | **RESPUESTA / INFORME JUSTIFICADO** | **CUMPLIMIENTO** |
| **Versión pública de la asamblea en donde se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04.** | Se adjunta el Acta del Comité de Transparencia UAI-CT-ORD-04-2024, en la que se tomó el Acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04. | **Colma** |
| **Nombre de los servidores públicos que participaron en dicha asamblea, cargo y, documento que los acredite como servidores públicos habilitados.** | Se remite el Acta del Comité de Transparencia UAI-CT-ORD-04-2024, del que se desprenden los nombres; se remiten algunos oficios de designación como servidor público habilitado. | **Colma** |
| **Constancia de registro del Comité de Transparencia ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.** | En respuesta, se remite documento del que se desprende el registro de 3 Integrantes del Comité de Transparencia ante el INFOEM y, se complemente con el registro de uno más en calidad de informe justificado; no obstante ese integrante no participó en el acta de referencia. | **Colma** |
| **El motivo y fundamento legal por medio del cual se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04.** | En calidad de informe justificado, se informa que el fundamento del Acuerdo UAI/CT/ORDINARIO/2024/04/04 se encuentra establecido en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de conformidad con el punto 4 del Acta UAI-CT-ORD-04-2024, que se transcribe. | **Colma** |

1. Como se desprende del cuadro anterior, el rubro relativo a la versión pública de la asamblea en donde se emitió el acuerdo UAI-CT-ORD-04-2024, se tuvo por atendido ya que se remitió el Acta donde se formalizó el Acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04 y, que ahora se sabe corresponde a una sesión del Comité de Transparencia. Al respecto si bien el particular refirió el termino *asamblea*; también lo es que los particulares no están obligados a precisar los términos legales, administrativos o técnicos, formales, bastando con otorgar una expresión documental de la información a la que desean acceder, pues no es su obligación conocer a cabalidad la terminología o ser expertos en la materia en la que verse el soporte documental al que desean acceder.
2. Ahora bien, las sesiones de los comités de transparencia, corresponden a las reuniones formales en la que los miembros de dicho Comité se congregan para discutir, analizar y tomar decisiones -acuerdos- relacionadas con la promoción, implementación y, clasificación de información pública o de datos personales con la finalidad de garantizar el acceso a la información y promover la rendición de cuentas en los sujetos obligados. En ese contexto, al obrar en dicha acta el Acuerdo referido por el solicitante es que se tiene por colmado el punto de referencia como se observa:

****

1. Seguidamente, deviene el rubro al de nombre y cargo de los servidores públicos que participaron en dicha *asamblea*, cargo y, documento que los acredite como servidores públicos habilitados. Al respecto se tuvo por colmado en razón que los nombres se desprenden de la propia acta remitida; en ese sentido recordar que el derecho de acceso a la información se colma con la entrega del soporte documental donde conste o se advierta la información, sin contar con la obligación de generar documentos *ad hoc* para satisfacer las pretensiones particulares de los solicitantes, por lo que se insiste, en que con la entrega de lo solicitado se tiene por cumplido el rubro de referencia.
2. Por otro lado respecto al documento que los acredite como servidores públicos habilitados, también se tiene por colmado; en razón de haberse remitido en respuesta tres oficios en favor de los servidores públicos: Francis Nayeli Medina Sáenz, Miguel Ángel Trejo Toral y Arturo Silva Sánchez, de los cuales solo dos forman parte del Comité de Transparencia que participó en el Acta de referencia, en ese sentido se advierte que el C. Miguel Ángel Trejo Toral, no fue participe siendo su representante la que firmó el Acta. Dicho lo anterior es necesario subrayar que para ser integrante del Comité de Transparencia no debe necesariamente ser un servidor público habilitado; sumado a que en el acta de mérito, no se advierte que participen en calidad de servidores públicos habilitados.
3. Toda vez que un servidor público habilitado , es aquel ha sido formalmente designado para gestionar, atender y resolver las solicitudes de acceso a la información pública, así como para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales, como se desprende del artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*Artículo 59. Los servidores públicos habilitados tendrán las funciones siguientes:*

*I. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia;*

*II. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia;*

*III. Apoyar a la Unidad de Transparencia en lo que esta le solicite para el cumplimiento de sus funciones;*

*V. Proporcionar a la Unidad de Transparencia, las modificaciones a la información pública de oficio que obre en su poder;*

*V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta;*

*VI. Verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los supuestos de información clasificada; y*

*VII. Dar cuenta a la Unidad de Transparencia del vencimiento de los plazos de reserva.*

1. Y por otro lado, el Comité de Transparencia del que versa la solicitud, corresponde a un órgano colegiado e integrado por lo menos por tres miembros, debiendo de ser siempre un número impar y que de acuerdo al artículo 46 de la Ley de la Materia estará integrado de la siguiente manera:

*“Artículo 46. Los sujetos obligados integrarán sus Comités de Transparencia de la siguiente forma:*

*I. El titular de la unidad de transparencia;*

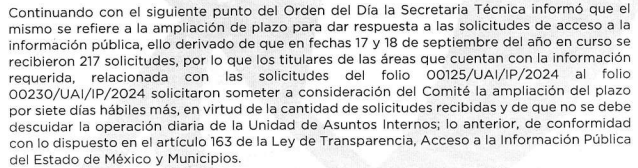
*II. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente; y*

*III. El titular del órgano de control interno o equivalente.*

*También estará integrado por el servidor público encargado de la protección de los datos personales cuando sesione para cuestiones relacionadas con esta materia.*

*Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto.”*

1. En ese contexto la Servidora Pública Francis Nayeli Medina Sáenz tiene el carácter de vocal del Comité, Arturo Silva Sánchez, el de Invitado y, Miguel Angel Trejo Toral, el Encargado de la Protección de Datos Personales; luego entonces, falta pronunciamiento del Héctor Daniel Zaragoza Manrique, Titular de la Unidad de Transparencia y Angélica Romero Villanueva, Encargada de la Unidad de Gestión Documental, Quejas y Denuncias, empero en el acta de mérito no participan como servidores públicos habilitados, luego entonces no se advierte obligatoriedad para que cuenten con oficios de designación como servidores públicos habilitados para formar parte del Comité de Transparencia.
2. Finalmente, respecto de la constancia de registro del Comité de Transparencia ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se tuvo por colmado; toda vez que se remitió constancia del registro en la página que este Instituto habilita para tal efecto del: Titular de la Unidad de Transparencia, Contralor Interno y del Responsable del Área Coordinadora de Archivo o Equivalente; asimismo en calidad de informe justificado, el registro del Encargado de la Protección de Datos Personales, sin embargo este no tuvo participación en el Acta de referencia, de lo cual se reitera, se tuvo por colmado el punto en comento, pues es de recordar la integración del Comité de Transparencia establecido en el Artículo 46 de la Ley de la Materia antes transcrito y que se tiene por reproducido en el presente apartado en obvio de repeticiones innecesarias.
3. Finalmente, respecto del motivo y fundamento legal por medio del cual se emitió el acuerdo UAI/CT/ORDINARIA/2024/04/04, también se tuvo por atendido en razón que se informó que el fundamento se encuentra establecido en el artículo 163 de la Ley de la Materia (que obra también en el Acta remitida); luego entonces al versar el Acuerdo respecto de la ampliación de plazo para atender la solicitud de información, es procedente en virtud que el precepto invocado ciertamente es inherente a la excepción para ampliar el plazo ordinario hasta por siete días hábiles más. Respecto al *motivo* se tiene por colmado; toda vez que al remitir el Acta del Comité de Transparencia donde se realizó el Acuerdo, se desprenden los motivos, como se observa:



**40.** Con la determinación anterior quedará por colmado el derecho de acceso a la información del ahora **RECURRENTE**; toda vez que el Derecho que tutela este Órgano Garante corresponde a la *igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1) en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal*[[2]](#footnote-2)que se constituye como una herramienta fundamental para *ejercer control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública[[4]](#footnote-4)* que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.[[5]](#footnote-5)* ”

**41.** Es así que, todos los actos de autoridad que realicen los Sujetos Obligados **deben estar** documentados y, bajo el más alto estándar de transparencia deberán poner toda la información que se encuentre en su posesión, a disposición de los particulares que la soliciten.

**42.** Además, debemos tomar en cuenta los artículos 4 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales establecen lo siguiente:

***Artículo 4.*** *El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información*** *generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o* ***en posesión de los sujetos obligados es pública*** *y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

*Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes.*

*Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.*

**43.** Es así que, por un lado se tiene la obligación de documentar todos los actos que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias, mientras que por otro, se ven impuestos por la obligación de hacer pública toda aquella información que se encuentre en su posesión en estricto apego a los principios de eficacia[[6]](#footnote-6) y máxima publicidad, sobre éste último se debe poner mayor énfasis, puesto que establece que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, oportuna y accesible, lo que permite que la ciudadanía tenga un amplio acceso sobre lo que es el actuar de las autoridades.

**44.** Robustece lo anterior la Tesis aislada identificada con la clave I.4º.A.40 A del Cuarto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en el libro XVIII, Marzo 2013, Página 1899.

***“ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO.*** *Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa.”*

**45.** Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO**. Resultan infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer en el Recurso de Revisión **07343/INFOEM/IP/RR/2024**, en términos del Considerando **CUARTO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO**. Se **CONFIRMA** la respuesta emitida por la Unidad de Asuntos Internos**,** en la solicitud de información **00524/UAI/IP/2024.**

**TERCERO.** Notifíquese al Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO** vía SAIMEX, para su conocimiento.

**CUARTO.** Notifíquese a **EL RECURRENTE** la presente resolución vía SAIMEX.

**QUINTO.** Se hace del conocimiento de **EL RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, Fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Párr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004), disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 9. …

   II. Eficacia: Obligación del Instituto para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información;

   … [↑](#footnote-ref-6)